

Doctor

**CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA**

**JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI**

[of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**REFERENCIA:** CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

**PROCESO:** REPARACIÓN DIRECTA

**RADICACIÓN:** 76001-33-33-015-2024-00108-00

**DEMANDANTE:** FABIAN ESTEBAN YEPES CASTILLO Y OTROS

**DEMANDADO:** DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, conforme se acredita con la escritura pública adjunta que contiene el poder de representación, encontrándome dentro del término legal procedo en primer lugar a CONTESTAR LA DEMANDA impetrada por **FABIAN ESTEBAN YEPES CASTILLO Y OTROS** en contra del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS**, y en segundo lugar a CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA formulado por el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, en virtud de la **Póliza de Responsabilidad Civil No. 1507223000670** cuya vigencia corrió desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 16 de noviembre 2023; para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, así como las que contiene el llamamiento en garantía que nos ocupa, en los siguientes términos:

## **CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD**

El despacho mediante Auto Interlocutorio No. 475 expedido el 23 de septiembre de 2024 resolvió admitir la demanda de reparación directa. Por su parte el llamamiento en garantía a mi procurada fue admitido por el despacho mediante Auto Interlocutorio No. 240 del 10 de abril de 2025, notificado por estado el 11 de abril de 2025, motivo por el que es correcto afirmar que nos encontramos en término para contestar la demanda y el llamamiento en garantía, atendiendo a que el artículo 225 del CPACA establece que la llamada en garantía cuenta con quince (15) días para contestar la demanda y el escrito del llamamiento en garantía, término que se comienza a contabilizarse tras dos (2) días hábiles siguientes a la remisión del correo electrónico de la notificación personal, conforme a lo dispuesto en los artículos 199 y 205 del CPACA<sup>1</sup>. En el caso concreto, el término se computa de la siguiente manera: (i) de la notificación electrónica los días 21 y 22 de abril de 2025<sup>2</sup>; (ii) traslado del llamamiento, iniciando el 23 de abril de 2025 y continuando los días 24 y 25, 28, 29 y 30 de abril, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, y finalizando el miércoles 14 de mayo de 2025. Por lo anterior, es correcto afirmar que este escrito se presenta dentro del término procesal previsto.

## **CAPÍTULO II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

### **I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**FRENTE AL HECHO PRIMERO:** A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si el señor Fabian Esteban Yepes Castillo tenía 28 años para la época de los sucesos. Sin embargo, se evidencia en el

<sup>1</sup> Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: (...) 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

<sup>2</sup> Teniendo en cuenta que entre el 12 y el 20 de abril se presentó la vacancia judicial por semana santa de 2025

expediente copia del registro civil de nacimiento del mencionado, el cual puede dar cuenta de ello, motivo por el cual nos atemperamos a la validez del documento allegado al proceso.

**FRENTE AL HECHO SEGUNDO:** A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el señor Fabian Esteban Yepes Castillo devengaba algún tipo de remuneración producto de su trabajo, sin embargo, debe dejarse señalado desde ya, que, dentro del material de convicción aportado con la demanda, no se advierte ningún tipo de prueba que acredite ni el oficio ni mucho menos la suma mencionada en el punto como salario. Al respecto, se debe atender que el Consejo de Estado ha manifestado en una línea de argumento pacífica, como la expuesta por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de Sala Plena, mediante Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019 cuyo magistrado ponente fue el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, Radicación No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572), en donde se aclara que los ingresos no se presumen con base en la edad o calificaciones profesionales. En este escenario, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita acreditar lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO TERCERO:** A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el 16 de octubre de 2023 el señor Fabian Esteban Yepes Castillo se desplazaba en calidad de conductor de la motocicleta de placa CKU75G, por la calle 10 entre carreras 32 y 33 en la ciudad de Cali. Sin embargo, nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso y a la validez de los documentos allegados como pruebas y/o anexos a la demanda, relacionados con el hecho en cuestión. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita acreditar lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO CUARTO:** A mi procurada no le consta directa o indirectamente si al llegar el señor Yepes a la calle 10 entre carreras 32 y 33 en la ciudad de Cali perdió el control de su vehículo y cayó unos metros adelante, producto de un obstáculo en la vía correspondiente a un maletín vial. Sin embargo, nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso y a la validez de los documentos allegados como pruebas y/o anexos a la demanda, relacionados con el hecho en cuestión. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita acreditar lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO QUINTO:** No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado de la parte demandante respecto de las condiciones de señalización del sitio en que presuntamente ocurrieron los hechos, ello porque no obra en el expediente prueba que permita arribar a tal conclusión. En este sentido, le corresponderá a la parte actora, acreditar lo expuesto en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

**FRENTE AL HECHO SEXTO:** A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si para el momento de los hechos relatados en la demanda, la calle 10 entre carreras 32 y 33 de la ciudad de Cali, era propiedad del Municipio de Cali. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

**FRENTE AL HECHO SÉPTIMO:** A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si para el momento

de los hechos relatados en la demanda, en la calle 10 entre carreras 32 y 33 de la ciudad de Cali, se presentaba algún tipo de obra y si con ocasión de ella se había instalado un maletín vial. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

**FRENTE AL HECHO OCTAVO:** A mi prohiada no le consta directa o indirectamente si para el momento de lo descrito en la demanda se había celebrado Contrato No. 300-CO-4133-2023 entre el Consorcio Gran Colector y Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. cuyo objeto fue “*Diseños y obras para el entamboramiento – Tapa Canal de Autopista Sur Oriental entre carreras 31 y 37*”, sin embargo, desde ya se debe dejar anotado que si este hecho está direccionado a establecer la relación entre las obras de dicho contrato y los hechos que generaron el daño que da sustento a la acción que nos ocupa, ello se debe entender como una confesión (en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011), por cuanto la parte demandante conoce y es consciente de que en esas condiciones se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Especial de Santiago de Cali, pues en el escenario planteado, cualquier responsabilidad al respecto, se debe direccionar a las partes del convenio en que se desarrollaban las obras que presuntamente generaron el daño alegado.

**FRENTE AL HECHO NOVENO:** A mi prohiada no le consta directa o indirectamente si para el momento de lo descrito en la demanda el Consorcio Gran Colector estaba conformado por Proquing S.A.S y City G&R S.A.S., sin embargo, nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso y a la validez de los documentos allegados como pruebas y/o anexos a la demanda, relacionados con el punto en cuestión. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita acreditar lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO DÉCIMO:** A mi prohiada no le consta directa o indirectamente, por no ser de la esfera de sus operaciones, si el señor Fabian Esteban Yepes fue trasladado en ambulancia a la Clínica Colombia en la ciudad de Cali, así como tampoco si en dicha entidad le diagnosticaron “*Luxofractura C5-C6 con disminución de la amplitud del canal medular condicionado injuria medular traumática, con luxación y fractura de los elementos posteriores de la columna y lesión del complejo ligamentario posterior*,”. Sin embargo, nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso y a la validez de los documentos allegados como pruebas y/o anexos a la demanda, relacionados con el hecho en cuestión. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO DECIMOPRIMERO:** Este punto se encuentra compuesto por diferentes aseveraciones, motivo por el cual me permito pronunciarse sobre cada una de ellas de manera separada.

En primera medida a mi prohiada no le consta directa o indirectamente, por no ser de la esfera de sus operaciones, si el señor Fabian Esteban Yepes se encuentra en proceso de calificación ante la Junta Regional de Invalidez, sin embargo, debe dejarse anotado desde ya, que no obra en el expediente prueba alguna que de fe de que el trámite se esté adelantando y/o que haya sido abordado por la entidad referida. Aunado a ello, dentro de las solicitudes probatorias no se anuncia que se va a allegar el dictamen que emita la junta con posterioridad, por lo que se debe entender desde ya, que en el caso no existe y no habrá dictamen de pérdida de capacidad laboral, porque no se adjuntó y no se solicitó en la oportunidad procesal pertinente.

En segunda medida, no es un hecho que con fundamento en el Decreto 1507 de 2014, el apoderado de los actores tenga la facultad de calcular el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, por lo que la cifra referida claramente constituye una apreciación subjetiva encaminada a fortalecer la teoría de la demanda, la cual no puede tener efector probatorios, máxime cuando, como se dijo, el dictamen no fue allegado como prueba y no fue anunciado para allegarse con posterioridad, motivo por el que cualquier tipo de cuantificación al respecto, resulta inútil.

**FRENTE AL HECHO DECIMOSEGUNDO:** No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza el togado respecto de lo que él considera ha sido el estado anímico de los integrantes de la parte actora tras los sucesos narrados en la demanda. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO DECIMOTERCERO:** No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza el togado respecto de la forma en que él considera se han alterado las condiciones de vida de los integrantes de la parte actora tras los sucesos narrados en la demanda. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO DECIMOCUARTO:** A mi prohijada no le consta directa o indirectamente, por no ser de la esfera de sus operaciones, si los demandantes han recibido indemnización alguna o si han sido reparados por alguna de las entidades de la parte pasiva de la acción. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este hecho.

## **II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad. Lo anterior, comoquiera que la responsabilidad del ente asegurado no se estructuró, toda vez que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta falla en el servicio, como del daño antijurídico y en especial del nexo de causalidad entre ambos. En el *sub-lite*, la parte demandante no ha cumplido con ello, lo que inviabiliza la declaratoria de responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, me referiré a cada una de las pretensiones expuestas en el escrito de la demanda, de la siguiente manera:

**FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA DENOMINADA “4.1”:** Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a que se convoque a pagar suma alguna en favor de los demandantes, en contra de las entidades demandadas y especialmente en contra de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, en razón a que: i) No existe ningún elemento fáctico, jurídico o probatorio que permita establecer que, por parte de mi representada, del Distrito de Santiago de Cali o de cualquiera de las demandadas se haya presentado una conducta omisiva, negligente o imprudente que haya ocasionado el daño que se alega en la demanda y aquí nos convoca; ii) La parte actora no ha acreditado que en el sitio de los hechos se haya presentado una falta de señalización respecto del maletín vial que presuntamente causó el daño; iii) Los demandantes no han demostrado eficientemente que la

causa determinante del presunto accidente de tránsito haya sido justamente la falta de señalización del maletín vial, pues no ha allegado elementos de prueba que permitan determinarlo; iv) La parte actora no ha acreditado en forma efectiva el daño, por cuanto no se evidencia pérdida de capacidad laboral alguna del señor Yepes, y tampoco ha demostrado que la causa eficiente de dicha supuesta pérdida, fue creada o concretada por mi representada o alguna de las entidades demandadas; v) Se hace evidente de los elementos probatorios allegados al caso, que el daño que da fundamento a la demanda tuvo como causa un hecho inequívoco, flagrante y determinante producido por la víctima; y finalmente vi) Se evidencia que ni la compañía aseguradora, ni el Distrito Especial de Santiago de Cali, pudieron intervenir en la producción del presunto daño, pues con fundamento en los hechos y documentos de la demanda, se advierte la falta de legitimación en la causa del ente territorial y en consecuencia de su aseguradora.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA DENOMINADA “4.2)”:** Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohilada, me opongo rotundamente a cualquier condena en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali y/o de mi procurada, de cancelar a favor de los demandantes cualquier suma de dinero, en razón a que, la acción y los medios de prueba en que se fundamenta, no acreditan en ninguna medida la responsabilidad administrativa o extracontractual de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, del Distrito Especial de Cali o de alguna de las demandadas.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.3). LUCRO CESANTE”:** Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohilada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, ya que no está demostrado que el señor Fabián Esteban Yepes tuviera una vinculación contractual, que tuviera ingresos periódicos o que devengara salarios de manera permanente, de tal forma que se pueda establecer lo que efectivamente dejaría de percibir por la imposibilidad (no demostrada y por tanto, no configurada) de ejercer labores, recordando que para ello se pudieron haber allegado por la parte actora desprendibles de pago o de nómina que dieran fe de los ingresos del demandante. En este sentido, el Consejo de Estado ha manifestado en una línea de argumento pacífica, que no se admite presunción en el ejercicio de un oficio, por lo que, al no existir prueba de ello ni mucho menos de su contraprestación, lo correspondiente es que no resulte procedente acceder a dicha pretensión.

Por último, tampoco es procedente el reconocimiento de esta tipología de perjuicio, habida cuenta que este debe cumplir las características de todo tipo de daño, esto es, que sea cierto, personal y directo, sin embargo, es evidente que no hay certeza sobre su cuantía, pues la parte actora no determinó el tiempo, IBC y demás rubros a tener en cuenta para su cálculo, lo que lleva indefectiblemente a su negativa.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.4). PERJUICIOS MORALES”:** Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohilada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, en razón a que la parte demandante no puede endilgar esa responsabilidad a las entidades de la parte pasiva, y en especial a mi representada, por no existir medio de convicción que permita establecer que se presentó una conducta omisiva, negligente o imprudente de alguna de las demandadas que haya ocasionado el daño, porque la parte actora no ha acreditado que se haya presentado falta de señalización respecto del maletín vial que presuntamente causó el daño y que ello haya sido la causa determinante del accidente de tránsito, pues además, no se ha acreditado ni la pérdida de capacidad laboral propiamente dicha, ni que la causa eficiente de ella fue creada o concretada por alguna de las entidades demandadas y porque se presenta un hecho inequívoco, flagrante y determinante de la víctima; como ya se manifestó.

Aunado a lo anterior se debe resaltar que, a efectos de los intereses de mi procurada y su asegurada, en este caso -además- se advierte una evidente falta de legitimación en la causa por pasiva del ente territorial y consecuentemente de la compañía aseguradora, por lo que, si de alguna manera resultase procedente el examen sobre algún tipo de responsabilidad respecto de un hecho causado por un incumplimiento -sea cual sea- en la ejecución en un contrato entre el Consorcio Gran Colector y Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., dicha responsabilidad se deberá analizar sólo respecto de estas entidades y no de otras

como se pretende en la demanda.

Por lo anterior, cualquier tasación de los perjuicios morales resulta altamente especulativa en cuanto no existe un parámetro objetivo que permita su determinación. Así mismo, el valor solicitado por la parte demandante es exagerado, en razón a que está solicitando una indemnización propia de una gravedad de la lesión igual o mayor al 50% de pérdida de capacidad laboral, lo que representaría un estado de invalidez o lo que se asemeja al daño en caso de muerte, lo cual, es claro que no se da en el presente caso, pues incluso si se atendieran las consideraciones personales y subjetivas del apoderado demandante, el parámetro de tasación debería ser de 40% y no de más de 50% como lo pretende. Sin embargo, lo cierto es que no existe medio suasorio conducente, pertinente y útil que permita determinar la existencia de un daño y con ello la forma de tasarlo, y en ese contexto, es decir de daño 0, cualquier pretensión al respecto resulta exagerada y desproporcionada por lo que no puede ser procedente acceder a la pretensión en cuestión.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.5). DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN”:** Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio en cuanto el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio se encuentra subsumido en el daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma, sino incluida en el perjuicio ya mencionado. Ello implica que desde la parte activa de la acción se debe demostrar de manera efectiva la existencia del daño a la salud referido, y ello no se presenta en el caso, pues no se ha podido demostrar por parte de los demandantes, la existencia de responsabilidad de las entidades demandadas y mucho menos de la aseguradora que represento, y con ello se evidencia la ausencia de obligación al respecto.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.6). PERJUICIO DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD”:** Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, toda vez que desde la parte demandante no se acredita ni se desarrolla cuál es la oportunidad que el señor Yepes perdió con las presuntas omisiones de mi poderdante, del Distrito de Santiago de Cali o de las otras entidades demandadas, sino que lejos de probar sus pretensiones, lo que busca es obtener una disminución de su carga probatoria al no poder demostrar el nexo de causalidad entre el daño y las entidades demandadas. En este sentido, el Consejo de Estado se ha pronunciado bajo el entendido que esta figura no puede convertirse en un mecanismo para declarar la responsabilidad de un demandado, en ausencia de la acreditación del nexo de causalidad, pues si es así, lo que procede es la exoneración de la responsabilidad. Siendo así, al no existir un medio de prueba que acredite dicho perjuicio no es procedente acceder a dicha pretensión.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.7). DAÑO A LA SALUD”:** Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, en razón a que la parte demandante no puede endilgar esa responsabilidad a las entidades de la parte pasiva, y en especial a mi representada, por no existir medio de convicción que permita establecer que se presentó una conducta omisiva, negligente o imprudente de alguna de las demandadas que haya ocasionado el daño, porque la parte actora no ha acreditado que se haya presentado falta de señalización respecto del maletín vial que presuntamente causó el daño y que ello haya sido la causa determinante del accidente de tránsito, pues además, porque no se ha acreditado ni la pérdida de capacidad laboral propiamente dicha, ni que la causa eficiente de ella fue creada o concretada por alguna de las entidades demandadas y porque se presenta un hecho inequívoco, flagrante y determinante de la víctima; como ya se manifestó.

Aunado a lo anterior se debe resaltar que, a efectos de los intereses de mi procurada y su asegurada, en este caso -además- se advierte una evidente falta de legitimación en la causa por pasiva del ente territorial y consecuentemente de la compañía aseguradora, por lo que, si de alguna manera resultase procedente

el examen sobre algún tipo de responsabilidad respecto de un hecho causado por un incumplimiento -sea cual sea- en la ejecución en un contrato entre el Consorcio Gran Colector y Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., dicha responsabilidad se deberá analizar sólo respecto de estas entidades y no de otras como se pretende en la demanda.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.8). CONDENA DE INTERESES MORATORIOS”:**

Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que la misma sólo tiene sentido en el escenario en que se decreten las demás solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.9). CONDENA DE COSTOS DEL PROCESO”:**

Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la declaratoria de esta pretensión, en cuanto la obligación para la compañía aseguradora nace en el momento en que se realice el siniestro, es decir, en el momento que se declarase que el Distrito de Santiago de Cali resulta responsable extracontractualmente por los daños alegados por los demandantes. En este sentido, al ser este el objeto del litigio y al no existir una sentencia en firme, no es posible pretender las costas del proceso sobre una obligación que aún no ha nacido a la vida jurídica.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “4.11). INDEXACIÓN”:**

Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que la misma sólo tiene sentido en el escenario en que se decreten todas las solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

**III. EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA**

**1. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN FORMULÓ EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MI REPRESENTADA**

Coadyuvo las excepciones propuestas por el Distrito Especial de Santiago de Cali, sólo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mi representada y bajo ese mismo tenor formulo las siguientes:

**A. EXCEPCIONES DE MÉRITO:**

**2. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, los presuntos daños padecidos por el señor Fabián Esteban Yepes Castillo se causan por una -también presunta- falta de señalización de un maletín vial existente a causa de la obra que estaba adelantando el Consorcio Gran Colector, producto del Contrato No. 300-CO-4133-2023 suscrito con Empresas Municipales De Cali E.I.C.E. E.S.P., cuyo objeto era “*Diseños y obras para el entamboramiento – Tapa Canal de Autopista Sur Oriental entre carreras 31 y 37*”. Esta situación hace que resulte claro que los hechos demandados son independientes y totalmente ajenos al Distrito Especial de Santiago de Cali, toda vez que las responsabilidades adquiridas en virtud de tal contrato, le son exclusivas a las partes, motivo por el cual, en caso de tener que dirimirse la responsabilidad de alguna entidad a causa de una omisión en el ejercicio del referido acuerdo, esta deberá girar en torno a las partes del mismo, pues estas gozan de autonomía tanto administrativa como financiera, tal como se advierte de los certificados de existencia y representación legal aportados con la demanda.

Con todo ello se hace evidente que el Distrito Especial de Santiago de Cali no tuvo participación alguna en la producción del daño reclamado, por ello, debe el honorable Juez, desvincular de manera definitiva del presente proceso a la entidad territorial por la evidente configuración de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Ahora bien, respecto del tema el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia establece que se debe interpretar la legitimación en la causa por pasiva de la siguiente manera:

*“LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Fundamento La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (...) La legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia”<sup>3</sup>. Negrilla y subrayado fuera de texto.*

*La legitimación en la causa -legitimatío ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal (...)”<sup>4</sup> (Subrayado y negrillas fuera de texto original)*

Conforme a lo anterior, la legitimación en la causa por pasiva según el Consejo de Estado hace referencia a ser el titular directo llamado para responder por el interés jurídico debatido, en este caso, implica tener la calidad de estar relacionada directamente con el elemento que presuntamente ocasionó los daños alegados por el señor Yepes, situación que no se da, en tanto como se explicó, en caso de presentarse los hechos tal como se aducen en el escrito petitorio, los mismos tuvieron lugar a causa de la ejecución de un contrato en el que no es parte el Distrito Especial de Santiago de Cali, sino las otras entidades demandadas, las cuales cuentan con independencia tanto administrativa como financiera y son sujetos de derecho capaces de responder por sus actos u omisiones.

Por lo ampliamente expuesto en este punto, salta a la vista que la entidad territorial demandada y asegurada por mi poderdante, carece de la legitimación en la causa por pasiva para responder por la reparación de los daños pretendidos por los demandantes.

### 3. CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

En el presente caso la parte actora pretende atribuir la responsabilidad de la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda a la entidad territorial de Santiago de Cali, con fundamento en la supuesta falta de señalización del sitio, pues en su teoría en el sitio se encontraba un maletín vial que fue el que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo, y para ello parece pretender hacer eco de lo contenido en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A0001629237 elaborado el 16 de octubre de 2023, sin

<sup>3</sup> Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. C.P. Enrique Gil Botero Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2012, Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00575-01(24677).

<sup>4</sup> Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 23 de abril de 2008, exp. 16.271, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

embargo, y sólo en el caso en que se decida darle pleno valor probatorio al informe, de dicho documento lo que se puede extraer es que la víctima estaba conduciendo en contravía de las obligaciones de tránsito dispuestas para el tipo de automotor involucrado.

En tal sentido cabe señalar que la demanda indica de manera específica que el señor Yepes Castillo conducía una motocicleta, pues en el “hecho” tercero del líbelo petitorio el apoderado indica “El 16 de octubre del 2023 a las 04:40 horas, se desplazaba en calidad de conductor de la motocicleta de placa CKU75G, por la calle 10 entre carreras 32 y 33 en la ciudad de Cali – Valle del Cauca.”. Por lo tanto, debemos ubicarnos en las responsabilidades de tránsito dispuestas para este tipo de vehículos.

Lo primero que se debe decir es que el IPAT utilizado para pretender endilgar responsabilidad a las demandadas, indica en su contenido que el vehículo del actor ya se había movido, es decir con la escena alterada, por lo que ya de por sí, lo contenido en el documento es cuestionable, al respecto dice:

LOSQUEJO TOPOGRÁFICO  
DE ACCIDENTE DE TRANSITO

No. A [REDACTED] 0001629237

HOJA 3

CONUSION

① CKU75G = barmanus plásticas

→ trayectoria del

② → trayectoria del vehículo

Nota: Al llegar al lugar se encontró la novedad de que el vehículo ① lo habían movido del punto final luego del impacto y se dibujó punteado.

- Se encontró ponal pero No entregaron acta FP14.

FP14

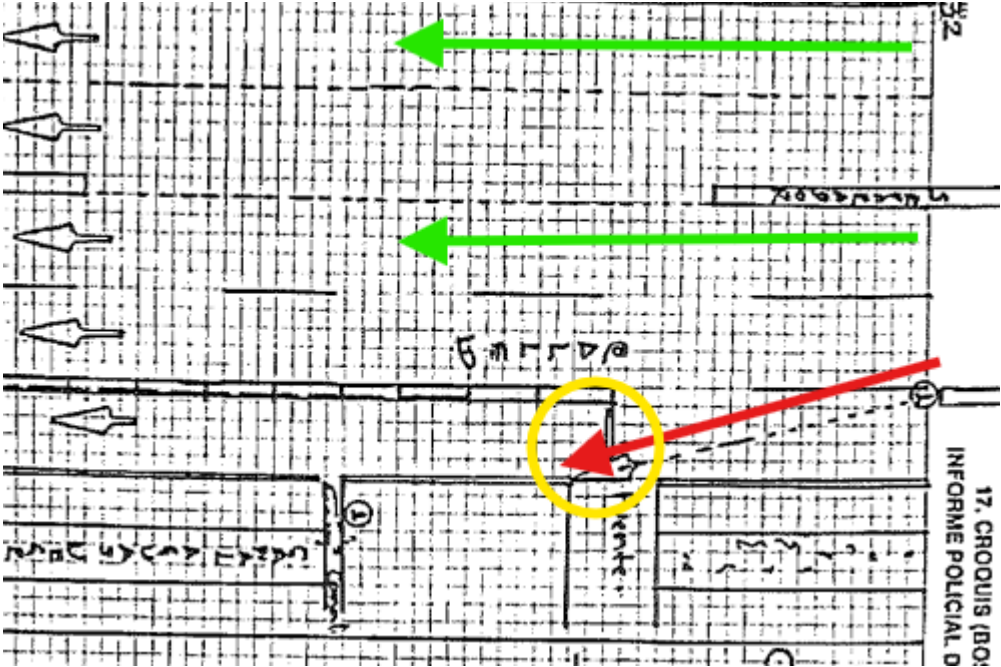
PUNTO DE REFERENCIA (P/R)

TABLA DE MEDIDAS

N°	T.M.	T.M.	DEFINICIÓN DEL PUNTO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

- Se transcribe porque es de difícil lectura. En tal sentido, del texto se extrae: “Nota: Al llegar al lugar se encontró la novedad de que el vehículo (1) lo habían movido del punto final luego del impacto y se dibujó punteado. Se encontró Ponal pero no entregaron acta FP14”.

En este sentido es claro que el contenido del informe puede o no corresponder a lo ocurrido, pero si nos ubicamos en la hipótesis de que efectivamente el documento relata lo ocurrido en el lugar y momento de los hechos, se debe atender que este solamente evidencia que el conductor conducía incumpliendo las normas de tránsito, tal como se pasará a explicar:



Con la línea roja hemos resaltado la trayectoria que llevaba el vehículo (por el carril izquierdo) según las consideraciones del IPAT, en líneas verdes la trayectoria que debía llevar según las normas de tránsito (por el carril derecho) y con el círculo amarillo hemos representado el maletín vial que presuntamente ocasionó el hecho que nos ocupa. El incumplimiento entonces se da porque, en efecto, el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, perteneciente al capítulo V referente a ciclistas y motociclistas, indica que:

*ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:*

**Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

De los anteriores datos se puede concluir que, en cualquier caso, la situación se ocasionó por la acción de la víctima de conducir en contravía de lo establecido en las normas de tránsito para vehículos tipo motocicleta, es decir por el carril derecho y a no más de un (01) metro de la acera, pues, aun en un escenario en el que el maletín vial estuviese, y no hubiese señalización de este, el accidente no se hubiese presentado si la víctima hubiese conducido por el carril que le correspondía.

A lo anterior se debe añadir que este tipo de elementos (maletines viales) cuentan con un efecto reflectivo propio, es decir, las líneas en su exterior están destinadas a que sea perceptible con facilidad tanto en el día como en la noche, ahora bien, el caso que nos ocupa tiene lugar en la madrugada, cerca de las 4:40 a.m., según lo relata la demanda en el “hecho” tercero, y el día de los sucesos (16 de octubre de 2023) era un día festivo, puntualmente un lunes festivo, motivo por el cual es dable inferir que el conductor podía provenir de una actividad que le desgastara físicamente o que puntualmente le impidiera conducir, lo cual explicaría el hecho de que el señor Yepes en una avenida vacía (dada la hora), con cinco carriles, se haya encontrado conduciendo por un carril por el que no le correspondía, a una velocidad que le impidió ver un elemento de tal tamaño y tal luminosidad, que sería visible para cualquier conductor perito y en sus sentidos y consecuentemente que haya perdido el control del vehículo.

Aunado a ello se debe tener en cuenta un aspecto que guarda especial relación, y es que según el IPAT, el hecho se presentó en una zona considerada como “Residencial”, por lo que, atendiendo a las estipulaciones del Código Nacional de Tránsito, el límite máximo para circular en este tipo de zonas es de 30 km/h, sumado al hecho de que por la hora en que presuntamente se presentó el suceso, la velocidad se debía disminuir aún más, por lo que a una conducción menor a 30 km/h, era posible, y debió ser posible, advertir el maletín vial.

En este contexto es claro que nos encontramos ante evidentes incumplimientos de las normas de tránsito por parte de la víctima, situación que resulta determinante para que se produzca el resultado que nos ocupa, y en tal sentido nos encontramos ante la configuración de los elementos propios de la figura de culpa exclusiva de la víctima, en los términos de lo considerado para esta figura por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

En consecuencia, al respecto se debe hacer referencia a lo que el Consejo de Estado en su Sección Tercera, mediante sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744), ha dicho al referirse sobre la culpa de la víctima:

*“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:*

*“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el*

*Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Bajo esta perspectiva, es menester indicar que el demandante al circular incumpliendo las normas de tránsito especiales y particulares para el tipo de vehículo que conducía, se expuso completamente al riesgo, en el entendido de que renunció a su propia seguridad y confió en sortear de manera imprudente la actividad peligrosa de conducir, a pesar de tener la obligación de conocer que no debía conducir el vehículo sin exceder el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo y por un carril por el cual no le correspondía desplazarse -el izquierdo-, situaciones que fueron establecidas para que su integridad como conductor se vea lo menos comprometida en un escenario de riesgo latente como lo es la conducción de vehículos.

Sobre este último particular, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Consejero Ponente: Juan De Dios Montes Hernández, en sentencia del 09 de diciembre de 1996, proferida dentro del expediente con radicado No. 9722, indicó lo siguiente:

***“Quien conduce debe prever que aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico puede ser evitado con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor”.*** (Negrillas fuera del texto original)

Aquí brilló por su ausencia, para el momento del hecho, el ejercicio de actitud síquica del conductor de la motocicleta, como quiera que, al ya inherente riesgo de conducir, le añadió por voluntad propia la conducta aún más riesgosa de hacerlo sin prever las normas de tránsito, y en tal sentido exponerse a que ello le llevara a un desenlace como el que alega le terminó ocurriendo. En suma, es contundente que no hubo una contribución activa de su parte con miras a evitar la ocurrencia del daño, dado que no cumplió sus obligaciones para ejercer la actividad peligrosa de conducir y por el contrario su actitud imprudente le expuso a una situación de la que terminó desencadenando la situación que nos ocupa.

En tal contexto es procedente concluir que las lesiones que manifiesta haber sufrido el actor, en caso de demostrarlas, son un claro ejemplo de dejar al azar su seguridad y no adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes, y bajo esta premisa, es claro que la causa eficiente del daño no corresponde ni puede ser atribuida a la falla en el servicio alegada, sino a una falta de cumplimiento de deberes legales y a la falta de precaución en el deber objetivo de cuidado, pues de haberse adoptado las medidas de seguridad antes indicadas, las cuales revisten las características de ser obligatorias cuando de asuntos de tránsito se trata, el hecho objeto de litigio no se hubiera configurado.

En este sentido, al acreditarse una culpa exclusiva de la víctima, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

#### 4. INEXISTENCIA DE FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La parte actora en su relato aduce que en el caso en examen la falla en el servicio se presenta por la falta de señalización en un maletín vial ubicado aproximadamente en la calle 10 entre carreras 32 y 33 de la ciudad de Cali, resaltando que la responsabilidad de las demandadas se estructura desde su presunta omisión, sin embargo, queda en evidencia por lo allegado al proceso como material de convicción, que tal aseveración no tiene soporte probatorio, ni sustento argumentativo desde el punto de vista de la sana crítica, pues como se ha explicado en apartes anteriores, no se ha probado por la parte activa que en el sector en mención se haya presentado ausencia de señalización.

Para sostener la tesis anteriormente enunciada, el despacho debe tener en cuenta que, fuera de los regímenes objetivos de responsabilidad del Estado, la falla en el servicio es el título de imputación por excelencia bajo el cual se juzga la conducta de la Administración Pública, *imputatio iuris* que requiere esencialmente su prueba y acreditación como la ha dicho el H. Consejo de Estado:

*“Es preciso recordar que, cuando se imputa un daño al Estado con fundamento en una omisión o inacción por su parte, el interesado se encuentra en el escenario de culpa probada y, en consecuencia, está llamado a aportar o, según el caso, solicitar el recaudo de los medios de convencimiento con los cuales se evidencie el supuesto de hecho que alega estructuró una falla en el servicio, **pues de otro modo, al juez no le resta otra posibilidad que negar las pretensiones por la insatisfacción del onus probandi que le asiste al interesado**, conforme con las previsiones del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil<sup>5</sup>.”<sup>6</sup> (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Sobre la carga probatoria de los demandantes cuando se trata de regímenes subjetivos como la falla en el servicio, la doctrina nacional ha reiterado la anterior posición jurisprudencial:

*“...es claro que el hecho de que un daño le sea imputable a una persona pública no es suficiente normalmente para hacerla responsable: **es necesario que la víctima demuestre que en su origen se encuentra un mal funcionamiento administrativo**. Se trata de que el actor establezca sobre todo la realidad de los hechos, porque la calificación propiamente jurídica corresponde al juez. Naturalmente, un cúmulo probatorio deficiente pone en riesgo la prosperidad de las pretensiones. Se trata entonces de que, normalmente, **la responsabilidad por falta es una responsabilidad por falta probada**. Según Llorens-Fraysse, “hay responsabilidad por falta probada cuando el juez exige que la falta sea establecida con certeza (habitualmente) el juez no se contenta con indicios”.*

*En consecuencia, **si el demandante no prueba la falla y en el caso concreto ésta no se presume, aun cuando la Administración nada haga para exonerarse, el fallo será absolutorio**.*

*Ahora bien, la prueba de la falta puede descomponerse en dos elementos, a saber: primero, la prueba del hecho invocado y, segundo, **la prueba de su carácter anormal, o sea, la prueba de la violación de las obligaciones administrativas**. Esta segunda cuestión es en realidad una operación de calificación jurídica que el actor demanda al juez confirmar, y en la cual interviene la apreciación de este último.”<sup>7</sup> (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En esa medida, es deber de la parte actora acreditar, en primer lugar, que la entidad pública tenía a cargo unos deberes y obligaciones y, en segunda medida, que estos fueron completamente desconocidos o incumplidos total o tardíamente, sin embargo, en el presente asunto, no se ha logrado acreditar ninguno de los elementos para derivar una falla en el servicio en cabeza de la entidad territorial ni de las otras

<sup>5</sup> “ARTÍCULO 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

<sup>6</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia de 22 de noviembre de 2021. Consejero Ponente: José Roberto SÁCHICA Méndez. Radicado No. 19001-23-31-000-2011-00434-01(53977).

<sup>7</sup> Saavedra Becerra, R. (2018). De la responsabilidad patrimonial del Estado. Tomo I. Grupo Editorial Ibáñez. Págs. 313-314.

entidades demandadas.

Ello se concluye porque en el escrito de la demanda el accionante no acompaña elementos probatorios que puedan dar fe de la presunta omisión, contrario a ello sustenta sus afirmaciones en la descripción realizada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A0001629237 elaborado el 16 de octubre de 2023 el cual se tomó cuando la escena había sido alterada, sin embargo, dicha concepción no puede tener la entidad suficiente para determinar una causa efectiva de un siniestro, toda vez que lo único que refleja el documento, es la percepción del agente, respecto de una situación que ya no correspondía con lo ocurrido, ya que él no estuvo ahí y ni siquiera tuvo acceso al escenario real.

Por este motivo el informe en cuestión no puede valorarse como plena prueba de la causa eficiente del hecho, ya que quien lo suscribió no estuvo en el momento preciso de la ocurrencia del mismo. Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 12 de abril de 2024, ha referido que:

*Es importante precisar que **las hipótesis que se consignan en los correspondientes informes del accidente de tránsito aluden a una posible causa “estimada” por el agente de tránsito quien deduce la causa del evento a partir de lo observado en la escena del siniestro, mas no un hecho debidamente probado, dado que, en muchos casos, como en el presente, la autoridad de tránsito no presencia directamente el accidente, sino que arriba al lugar en un tiempo posterior a la ocurrencia de este***<sup>8</sup>. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este sentido, es claro que el IPAT no prueba por sí solo que la causa eficiente del hecho haya sido la presunta inexistencia de señalización respecto de la presencia de un maletín vial, por lo que, su valor probatorio no es suficiente para acreditar el nexo de causalidad requerido para declarar la responsabilidad de las accionadas, pues reitero, se trata de meras especulaciones del agente de tránsito que hizo su aparición en el sitio de los hechos cuando la escena se había alterado, lo cual claramente no reviste el carácter de una verdad absoluta, y al no existir en el expediente otro medio de convicción que confirme la hipótesis aludida en el IPAT, no es posible declarar que la causa del hecho demandado haya sido la falta de señalización del maletín vial.

Frente al carácter probatorio del Informe Policial de Accidente de Tránsito, la postura jurisprudencial del Tribunal Administrativo del Valle ha sido pacífica, tal como se observa a continuación:

*Así entonces, **el informe policial de accidente de tránsito y su aclaración por sí solos no permiten determinar que el hueco en la vía haya sido la causa eficiente y única del daño**; las demás pruebas obrantes en el plenario como la historia clínica, los testimonios, los dictámenes periciales de la Junta Regional de Calificación del Valle y del Instituto de Medicina Legal, analizados en conjunto no permiten a la Sala tener certeza acerca de cuál fue la causa eficiente del daño, específicamente determinar si el accidente se causó por la existencia de un hueco en la vía, o por la culpa exclusiva de la víctima, pues dichos elementos probatorios solo indican la ocurrencia del accidente, la causación del daño y de algunos perjuicios a los demandantes pero no el nexo causal*<sup>9</sup>. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

*En este punto conveniente es precisar, **que la parte actora achaca como causa eficiente del accidente de tránsito ocurrido el 31 de mayo de 2015, a un hueco existente en la vía, soportando su aseveración en el referido informe de tránsito, sin embargo, no puede pasarse por alto que se trata de una hipótesis; luego dicho informe por sí solo no constituye prueba suficiente de dicha aseveración**, para ello se necesitaba de otras pruebas como las testimoniales, empero, los testimonios en este asunto solo rindieron declaración sobre las relaciones afectivas de la víctima con los demás*

<sup>8</sup> Sentencia del 12 de abril de 2024. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 19001333170120100035801 (59.914).

<sup>9</sup> Sentencia del 22 de agosto de 2019. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Zoranny Castillo Otalora. Radicación No. 76001333301320140019801.

demandantes<sup>10</sup>. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

*Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente la señora Laura Marcela Moreno Abelardi padeció un accidente de tránsito el día 05 de octubre de 2017, mientras conducía su motocicleta por la altura de la carrera 56 con calle 12, cuando presuntamente cayó por culpa de unos huecos en la vía, que en el informe de accidente de tránsito y croquis suscrito por el funcionario que atendió la eventualidad, se dejó constancia de la existencia de huecos en la vía que transitaba la víctima, **no obstante, esta Corporación no puede determinar fehacientemente que la causa del daño haya sido el mal estado de la vía, esto es, la presencia de huecos en ella, toda vez que si bien se acreditó la existencia de los huecos, en el informe, mas no hay certeza de ello, máxime que no hubo testigo presencial de los hechos u otra prueba que pruebe que efectivamente fue la causa del accidente.*** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Aunado a lo anterior y en la misma línea argumentativa, se debe indicar que el maletín vial del que se hace eco en la demanda se encontraba debidamente señalizado, y cumplía con los parámetros técnicos para advertir la presencia de un peligro o trabajo en la zona, y sumado a ello el mismo que era claramente perceptible para cualquier transeúnte y conductor de vehículo, que se encontrara conduciendo a una velocidad prudente, permitida y con estricto apego a todas las condiciones de la vía.

Por lo anterior, es menester indicar al despacho que la parte actora no ha cumplido con la carga probatoria de demostrar la falla en el servicio como elemento constitutivo de la responsabilidad del Estado, pues no obra en el expediente algún medio de convicción idóneo, pertinente, útil y concluyente que permita establecer la existencia de la presunta omisión del Distrito de Santiago de Cali y/o de las demás entidades demandadas, habiéndose explicado ampliamente los alcances limitados que tienen los elementos de convicción allegados.

En este sentido, al no acreditarse la falla, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez que se declare probada esta excepción.

## **5. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL ACTUAR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y EL DAÑO ALEGADO**

Se invoca este medio exceptivo atendiendo a que como se explicó en las consignas anteriores, la parte actora no logró probar la responsabilidad que pretende que sea imputada al ente territorial, pues no acercó medio de convicción con el que se pueda acreditar que se presentó una falla en el servicio que haya ocasionado afectaciones a los demandantes y que haya sido consecuencia de una conducta negligente, retardada u omisiva de la que pueda predicarse un nexo de causalidad entre la indebida prestación del servicio de las entidades demandadas y el daño alegado fruto de lo ocurrido el 16 de octubre de 2023, contrario a ello, como se explicó ampliamente en apartes anteriores, se evidencia la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, la cual resulta determinante para generar el desenlace por el que se exige perjuicios y lo que a su vez desliga la actuación u omisión del ente territorial del daño, es decir, rompe el nexo de causalidad.

Al respecto, el artículo 2341 del Código Civil, dice:

*“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”, se desprende necesariamente que **es obligatorio que la parte demandante acredite la existencia de tres elementos:** 1) el hecho dañoso acaecido culpablemente (o delictualmente si es el caso), 2) el daño y 3) **la relación de causalidad entre esos dos elementos.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

<sup>10</sup> Sentencia del 30 de julio de 2021. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Fernando Augusto García Muñoz. Radicación No. 76001333300620160009403.

En igual sentido, la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de septiembre de 2002, expediente 6143, señaló:

*“(…) Toda responsabilidad civil extracontractual se estructura sobre tres pilares fundamentales que, por lo general, debe demostrar el demandante: el hecho dañoso o culpa, el daño y la relación de causalidad (…)*”. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Igualmente, señaló la Corte Suprema de Justicia que es el demandante quien debe acreditar estos tres elementos, y en tal sentido ha dicho lo siguiente:

*“(…) se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa a otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclama a su vez indemnización por igual concepto, tendrá que demostrar en principio, el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos factores (…)*”. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Así entonces, en el escenario de análisis conductual que ofrece el esquema de la falla de prestación del servicio, los elementos que deben soportar la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado también son semejantes. No debe perderse nunca de vista que siempre recae en la parte actora la carga probatoria de demostrar al operador judicial la culpa - en este caso - el hecho o conducta constitutiva de falla en el servicio, el daño y su respectiva magnitud en aras de poderlo cuantificar y finalmente, pero no menos importante, el nexo de causalidad entre los dos primeros.

Así lo entendió el Magistrado Jorge Santos Ballesteros en Sentencia 6878 del 26 de septiembre del 2002, cuando dijo:

*“El fundamento de la exigencia del nexo causal entre la conducta y el daño no sólo lo da el sentido común, que requiere que la atribución de consecuencias legales se predique de quien ha sido el autor del daño, sino el artículo 1616 del Código Civil, cuando en punto de los perjuicios previsibles e imprevisibles al tiempo del acto o contrato señala que si no se puede imputar dolo al deudor, éste responderá de los primeros cuando son “consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”. Por lo demás, es el sentido del artículo 2341 ib. el que da la pauta, junto con el anterior precepto, para predicar la necesidad del nexo causal en la responsabilidad civil. (...) El causalismo ha sido entendido como un método filosófico- científico que intenta explicar los fenómenos a través del estudio de sus causas, de tal manera que la pretensión de reconocer en los sucesos de la vida una relación de causa-efecto se presenta como una de las búsquedas más grandes del ser humano, un delito o culpa – es decir, de acto doloso o culposo– hace responsable a su autor, en la medida en que ha inferido daño a otro”.*

Aterrizando al caso podemos afirmar entonces que no hubo culpa porque el hecho omisivo que el apoderado demandante quiere presentar como generador del presunto daño padecido por la víctima del caso, en realidad no lo fue, ello porque como se explicó en los medios exceptivos anteriores, dicha responsabilidad sólo puede ser atribuida en este caso puntual, a la culpa exclusiva y determinante de la víctima, quien en evidente desconocimiento de las obligaciones a él impuestas así como a las normas de tránsito, decidió exponerse al riesgo y a una situación en la que el desenlace que siempre se pretende evitar, finalmente ocurrió, lo cual, resulta altamente probable si se considera que la misma actividad de conducir es riesgosa y más si se realiza en desconocimiento de la Ley, como puede ser en este caso la desatención de lo contenido en los artículos 74 y 94 de la Ley 769 de 2002, reseñados anteriormente.

En ese sentido se expone que, para la procedencia de la figura de la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, se requiere de lo siguiente: la presencia de un actuar: positivo o negativo, esto es, de una acción u omisión por parte de quien alega padecer el daño; y ese actuar, viene a ser el

determinante y exclusivo del hecho que materializa el acontecer de las lesiones infligidas.

*(...) Desde la perspectiva general, es claro que el hecho de la víctima a efectos de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor, como quiera que no existe disposición jurídica que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hechos de la víctima y, más aún, de evitarlos. **En efecto, el demandado sólo se encuentra obligado a evitar los daños padecidos por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante frente a aquélla**, casos en los cuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoria debe acreditar la imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga. A contrario sensu, en las demás circunstancias, el demandado se libera si logra acreditar que fue la consecuencia del comportamiento de la propia persona que sufrió el daño. En ese sentido, la Sala debe precisar y desarrollar la posición jurisprudencial vigente. **No se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño**; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación. Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis<sup>11</sup>". (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Como en el caso en cuestión lo que se puede extraer de los elementos de hecho y de derecho es que la víctima tuvo una participación determinante en el desenlace, toda vez que no existe prueba de la falla, sino que se advierte su actuación en desconocimiento de sus obligaciones legales respecto de conducir a una velocidad adecuada y transitar por el carril derecho.

En este sentido, al no acreditarse el nexo de causalidad por los motivos expuestos, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

## 6. CONCURRENCIA DE CULPAS

De manera subsidiaria, considerando que sin lugar a duda la conducta de la víctima influyó en el resultado dañoso y, de no estimarse que esta fue la causa adecuada del mismo, se deberá analizar la concurrencia de culpas a luz de lo dispuesto por el artículo 2357 del Código Civil, que contempla: "*La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente*".

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha dicho:

*"Sobre el tema de la concausa, esta Corporación ha sostenido que **el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el cuántum indemnizatorio (artículo 2357 del Código Civil) en la medida en que la misma hubiere dado lugar al daño; es decir, cuando la conducta de los perjudicados participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado**. Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales –daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal–, la conducta del perjudicado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del cuántum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas características para configurar una co-causación del daño"<sup>12</sup>. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

<sup>11</sup> Sentencias: de 4 de octubre de 2007, exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, exp. 16696; sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>12</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 19256 del 7 de abril de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

En igual sentido dice el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en sentencia que ya se citó anteriormente, que:

*(...) incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación. Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis<sup>13</sup>.* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Entonces, de los argumentos antes señalados se deriva la relevancia de la participación de la víctima en la causación del daño, por cuanto el señor Yepes en su condición de conductor del vehículo en el que ocurrió el presunto hecho, actuó de manera imprudente al transitar por un carril que no le corresponde y probablemente a una velocidad indebida, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 51 y 94 de la Ley 769 de 2002.

En conclusión, sea o no la causa adecuada del daño, lo cierto es que la conducta de la víctima incidió directa y fue determinantemente en la causalidad de los hechos materia de debate, de manera que, de no eximir de responsabilidad a la entidad demandada, deberá ser objeto de valoración para que se reduzca la remota condena en contra de ella, como mínimo en un 50%.

## **7. FALTA DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE LOS PERJUICIOS Y EXAGERADA TASACIÓN DE LOS MISMOS**

La parte demandante no demostró la existencia de los perjuicios materiales e inmateriales que solicita, pues (i) no aportó -al menos- un dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta de Calificación de Invalidez que permita determinar la real existencia de un daño físico y su gravedad y (ii) no aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer que la víctima dejó de percibir ingresos desde el momento de los hechos y la causa de estos.

- **Frente al perjuicio de Daño Emergente, Lucro Cesante Consolidado y Futuro**

Los actores en el libelo petitorio indican en el aparte de “4.3.). *LUCRO CESANTE*” que pretenden el reconocimiento de:

- **“*Doscientos noventa y tres millones setecientos veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos M/CTE \$136.638.858*”, por concepto de lucro cesante**

Como se observa:

**4.3) LUCRO CESANTE:** A favor de Fabian Esteban Yepes. (Víctima). Por la suma equivalente a **doscientos noventa y tres millones setecientos veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos M/CTE \$136.638.858** o la suma superior que resulte probada, por los rubros futuros que hasta la fecha no se han causado.

Sin embargo, tras completarse el capítulo de pretensiones se incluye uno adicional denominado “*CAPITULO V LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE*” en el que se hacen otras consideraciones sobre dicho aspecto, y con él modifican el valor inicialmente requerido, para incrementarlo de la siguiente manera:

<sup>13</sup> Sentencias: de 4 de octubre de 2007, exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, exp. 16696; sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

**TOTAL, LUCRO CESANTE: \$ 178.471.920**

Habiéndose señalado la contradicción en cuanto a los valores pretendidos por este concepto se procederá a abordar el análisis de cada uno de los valores liquidados. Respecto de las sumas y criterios que se exponen en el capítulo sobre lucro cesante, salta a la vista que sus resultados carecen de una liquidación objetiva, pues podemos ver que se usan como criterios base de liquidación, aspectos hipotéticos o desacertados como los siguientes:

En primera medida dice el togado peticionario que la expectativa de vida de la víctima es de “627,6 meses” fundamentando tal consideración en lo contenido en la Resolución 1555 de 2010, sin embargo, es claro que utilizar tal criterio en la actualidad compone un error por cuanto la sociedad como sus condiciones, incluidas las tasas de mortalidad, varían en el tiempo, es por ello que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas “DANE”, actualiza los valores para adaptarlos a la realidades del país. Por lo anterior, lo correcto sería utilizar los datos de actualización del DANE con corte a la fecha más cercana de redacción de la demanda.

Ahora bien, respecto del ingreso mensual sobre el cual calcular la pérdida, también se incurre en un error, pues se observa que la demanda sugiere que el valor que se relaciona se dejó de percibir desde el momento de los hechos, cuando no existe prueba alguna de que el demandante perdiera dicho ingreso a causa de los hechos, y este es el único aspecto que realmente serviría de fundamento para liquidar con tal suma.

Aunado a ello se indica que se realiza la estimación de los valores, pero sobre el supuesto de una pérdida de capacidad laboral que no tiene soporte, es decir que el togado de los accionantes especula sobre lo que para él debe ser el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, cuando resulta claro que no tiene la calidad ni la condición para emitir un criterio al respecto y, aun así, calcula sus valores con base en dicha suposición, como se ve a continuación:

#### **PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y EDAD AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:**

Debido a que el señor Fabian Esteban Yepes, se encuentra en proceso de calificación la pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Invalidez, se calcula un porcentaje de 40% de PCL de acuerdo con las historias clínicas y al dictamen de medicina legal.

En esta manifestación salta a la vista que sus consideraciones se basan en el contenido de la historia clínica, que dicho sea de paso no tiene consideración alguna sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y sobre un dictamen de medicina legal que no se adjuntó entre los anexos de la demanda, que a efectos del trámite procesal implica que no existe.

En este sentido, es necesario recordar que el perjuicio del lucro cesante ha sido entendido como uno de naturaleza material, económico, de contenido pecuniario y que consiste en la afectación de un derecho patrimonial reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir a causa del daño padecido.

Por lo anterior, para que sea posible el reconocimiento del perjuicio de naturaleza económica, es necesario que se acredite su existencia cierta, actual o futura mediante elementos de convicción que permitan determinar el valor dejado de percibir. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del “(...) perjuicio que el daño ocasionó (...). **Este último para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir, “(...) cierto y no***

**puramente conjetural, [por cuanto] (...) no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario (...).**<sup>14</sup> (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En igual sentido, la misma corporación afirmó en sentencia del 24 de junio de 2008, que:

**(...) En cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.** Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (...)

Vale decir que **el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinsa en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente** (...)

Por último, están **todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables**.<sup>15</sup> (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En consecuencia, el lucro cesante no puede constituirse sobre conceptos hipotéticos o simples conjeturas que no están justificadas en posibilidades ciertas y objetivas y mucho menos en datos equívocos. De manera que resulta como deber indispensable de la parte demandante, acreditar el ingreso que la víctima dejó de percibir al momento de la ocurrencia del daño, pero todo esto basado en medios de convicción ciertos y no meramente especulativos.

A su vez el Consejo de Estado en sentencia de unificación reciente del 10 de julio de 2019, limitó todas las posibles discusiones que se pudieran derivar de este perjuicio y eliminó la presunción de que toda persona en edad productiva devenga al menos un salario mínimo, en cuanto contrariaba con uno de los elementos, esto es, la certeza exigida para conceder dicha indemnización, de manera que estableció que el lucro cesante solo sería reconocido cuando obren las pruebas suficientes que lo acrediten:

**La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto.** (...)

**En los casos en los que se pruebe** que la detención produjo **la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico**, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, **el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello**, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.

<sup>14</sup> Sentencia del 12 de junio de 2018. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2107-2018.

<sup>15</sup> Sentencia del 24 de junio de 2008. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2000-01121-01

La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad\_o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.<sup>16</sup> (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En definitiva, resulta claro que no es posible reconocer ningún perjuicio a título de lucro cesante (consolidado o futuro), en cuanto la parte demandante sustentó sus pretensiones en datos erróneos y meras suposiciones, pero no allegó ningún medio probatorio que permitiera demostrar que el presunto afectado dejó de percibir una remuneración como consecuencia del hecho que se alega, pues ni siquiera puede entenderse que el demandante tenía un ingreso por su trabajo, toda vez que no obra prueba de ello, por lo que cualquier indemnización de este perjuicio, en el caso puntual, resultaría insostenible, exagerada y sobre todo, especulativa.

- Frente a los perjuicios morales

La parte demandante solicitó a título de indemnización por los perjuicios morales las siguientes sumas:

- Fabián Esteban Yepes Castillo (presunta víctima): 100 SMMLV
- Ofelia Castillo Muñoz (madre): 100 SMMLV
- Karen Vanessa Yepes Castillo (hermana): 100 SMMLV

Sobre dicha pretensión debe afirmarse que su tasación no puede derivarse de calificaciones subjetivas realizadas por el apoderado de los demandantes, sino que debe basarse en factores objetivos como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral emitido por la entidad correspondiente, es decir una Junta de Calificación de Invalidez, tal como lo ha determinado el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 y el grado de vinculación de los solicitantes con la víctima.

En este sentido, la parte actora está solicitando como indemnización por concepto de perjuicios morales, valores evidentemente desproporcionados, pues como se adujo anteriormente, es pacífica la determinación del Consejo de Estado acerca de estos aspectos, y ha realizado una labor resaltable al determinar con detalle las sumas que pueden proceder en cada caso de reparación, por lo que era un deber del actor judicial el atender dichos parámetros.

En ese sentido ha dicho el órgano de cierre que para la reparación del daño moral en casos en los que se alega una lesión antijurídica producto de una acción u omisión de un agente del estado, puntualmente hablando de daños como lesiones físicas ocasionadas en virtud de una responsabilidad administrativa, los valores procedentes son los siguientes:

Tabla 2. Reparación del daño moral en caso de lesión

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1 Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	NIVEL 2 Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	NIVEL 3 Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	NIVEL 4 Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	NIVEL 5 Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

<sup>16</sup> Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572).

Como vemos, son sumas ostensiblemente alejadas de la concepción de la parte demandante pues en gracia de discusión, debe decirse que incluso el togado accionante incurre en otra contradicción, pues en el capítulo de lucro vemos como manifiesta que conforme a las historias clínicas y un dictamen de medicina legal que no existe, se debe entender como porcentaje de pérdida de capacidad laboral el cuarenta por ciento (40%), véase:

**PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y EDAD AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:**

Debido a que el señor Fabian Esteban Yepes, se encuentra en proceso de calificación la pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Invalidez, se calcula un porcentaje de **40% de PCL** de acuerdo con las historias clínicas y al dictamen de medicina legal.

En ese sentido lo coherente sería haber calculado los valores por perjuicio moral, con una pretensión máxima 80 SMMLV para el señor Yepes y su madre, y de 40 SMMLV para su hermana, pero contrario a ello, al momento de liquidar toma valores de referencia de una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y solicita en consecuencia 100 SMMLV, incluso para la hermana, lo cual deja en evidencia la total falta de técnica jurídica para la liquidación y la incongruencia con la que se establecen los valores pretendidos.

Habiéndose señalado lo anterior, debe dejarse claro que, al momento de esta contestación, la pérdida de capacidad laboral demostrada por la parte actora es cero (0), por lo que no podría ubicarse ni el directamente afectado, ni sus familiares, en ninguno de los rangos establecidos por el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, motivo por el cual, los valores pretendidos resultan claramente exagerados y consecuentemente improcedentes.

Ahora bien, más allá de la delimitación en abstracto de las sumas procedentes según qué casos y qué tipo de lesión, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, al respecto dice Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez<sup>17</sup>:

*La lesión a la que se refiere la cláusula constitucional y legal es otra cosa, sin embargo. Para que exista lesión en sentido propio no basta que perjuicio exista un perjuicio material, una pérdida patrimonial; **es absolutamente necesario que ese perjuicio patrimonial sea antijurídico, antijuridicidad en la que está el fundamento, como ya notamos, del surgimiento de la obligación reparatoria.*** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Y como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto.

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusivamente a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente al perjuicio a la vida en relación**

Los demandantes solicitan como indemnización de este perjuicio la suma de 100 SMMLV a favor de cada uno de los demandantes, así:

<sup>17</sup> García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomas Ramón, Curso de derecho administrativo, t II, 14 edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 378

- Fabián Esteban Yepes Castillo (presunta víctima): 100 SMMLV
- Ofelia Castillo Muñoz (madre): 100 SMMLV
- Karen Vanessa Yepes Castillo (hermana): 100 SMMLV

Frente a ello, se debe afirmar que el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio se encuentra subsumido en el daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma, sino incluida en el perjuicio ya mencionado. En ese sentido el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 14 de septiembre de 2011 con Radicación No. 38222, dijo:

*(...), cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud. (...)"*

Así mismo, el daño a la salud es reconocido únicamente a la víctima directa y no a sus familiares, por lo que, se debe manifestar que consecuentemente, la indemnización solicitada, no es procedente en ningún sentido en este caso.

- **Frente al perjuicio de la pérdida de oportunidad**

La parte demandante solicitó a título de indemnización por pérdida de oportunidad, las siguientes sumas:

- Fabián Esteban Yepes Castillo (presunta víctima): 100 SMMLV
- Ofelia Castillo Muñoz (madre): 100 SMMLV
- Karen Vanessa Yepes Castillo (hermana): 100 SMMLV

En relación con este tópico se debe indicar que desde la parte demandante no se acredita ni se desarrolla, inclusive, ni siquiera se sugiere, cuál es la oportunidad que cada uno de los mencionados perdió con las presuntas omisiones del Distrito de Santiago de Cali o de cualquiera de las otras entidades demandadas. En este sentido, el Consejo de Estado se ha pronunciado bajo el entendido que esta figura no puede convertirse en un mecanismo para declarar la responsabilidad de un demandado, en ausencia de la acreditación del nexo de causalidad, pues si es así, lo que procede es la exoneración de la responsabilidad.

Al respecto ha dicho el máximo órgano de la jurisdicción administrativa, en sentencia con Radicación: 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593) del 11 de agosto de 2010 con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez, que:

**La pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta éste que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio —material o inmaterial— para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento.**

(...)

Con el fin de precisar la noción de “pérdida de oportunidad” conviene identificar con la mayor claridad posible sus límites: así, de un lado, en caso de que el “chance” constituya en realidad una posibilidad muy vaga y genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual que no resulta indemnizable y, de otro lado, no puede perderse de vista que lo perdido o frustrado es la oportunidad en sí misma y no el beneficio que se esperaba lograr o la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen rubros distintos del daño. En consecuencia, la oportunidad difuminada como resultado del hecho dañoso no equivale a la pérdida de lo que estaba en juego, sino a la frustración de las probabilidades que se tenían de alcanzar el resultado anhelado, probabilidades que resultan sustantivas en sí mismas y, por contera, representativas de un valor económico incuestionable que será mayor, cuanto mayores hayan sido las probabilidades de conseguir el beneficio que se pretendía, habida consideración de las circunstancias fácticas de cada caso. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este sentido es claro que la responsabilidad probatoria a cargo de la parte demandante no ha sido satisfecha en ningún sentido, pues como se advirtió al inicio de este aparte, el libelo petitorio no hace referencia alguna a los mentados conceptos de “oportunidad” o “chance” que perdió cada uno de los demandantes, y en tal sentido no podemos apartarnos del precepto jurisprudencial al entender que si para éste, la situación alegada constituye una posibilidad muy vaga y genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual que no resulta indemnizable, es claro que la ausencia de determinación de dicha posibilidad, nos debe llevar a la misma conclusión lógica, es decir a que en el caso de autos estamos ante un “daño” que es meramente hipotético o eventual que no resulta indemnizable.

- Frente a los perjuicios por daño a la salud

La parte actora solicita que se reconozca en favor del señor Fabian Esteban Yepes Castillo la suma de 100 SMMLV, por concepto de daño a la salud. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha definido el daño a la salud, así: “(...) *se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma*”<sup>18</sup>.

Ahora bien, respecto a la acreditación y liquidación de este tipo de perjuicio inmaterial, el Alto Tribunal ha afirmado lo siguiente:

*“La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, **única y exclusivamente para la víctima directa**, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:*

GRAFICO REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD	
REGLA GENERAL	
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa
	SMLMV
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

*Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.*

<sup>18</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Rad. 28804 del 28 de agosto de 2014, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

*Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar las siguientes variables:*

- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
- Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
- La edad.
- El sexo.
- Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.
- Las demás que se acrediten dentro del proceso”<sup>19</sup>.

Como vemos, el daño a la salud también se reconoce dependiendo de la gravedad o levedad de la lesión y, en la misma medida, atendiendo a criterios como los ya expuestos, esto es, afectaciones a la actividad rutinaria de la víctima directa que se pudiese acreditar con un dictamen de pérdida de capacidad laboral, el cual no fue aportado al proceso, por lo que al momento de este escrito, no existe porcentaje de pérdida de capacidad laboral el cual se pueda cuantificar para liquidar, más allá de la inexistencia de la obligación de indemnizar por parte de la entidad demandada. En cualquier medida y sin que lo siguiente implique aceptación de responsabilidad alguna, se debe decir que conforme a los datos de la demanda en la que se indica que tienen la consideración de que la pérdida de capacidad laboral es del 40%, lo coherente hubiese sido liquidar la pretensión de este aspecto, en hasta 80 SMMLV, pero contrario a ello se solicita una suma exorbitante, incluso para lo que la parte demandante considera fue el daño en el caso. Así las cosas, en el asunto en concreto, resulta evidente que se presenta una cuantificación exagerada que desatiende la pacífica determinación del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, ya citado.

Ahora bien, más allá de la delimitación en abstracto de las sumas procedentes según qué casos y qué tipo de lesión, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, para lo cual se pueden atender los criterios expuestos por Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez, ya citados<sup>20</sup>.

Como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto en el caso particular.

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta sólo podrá ser reconocida a la víctima y deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusiva a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente a las pretensiones sobre intereses moratorios, condena en costas e indexación**

<sup>19</sup> Ibídem.

<sup>20</sup> García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomas Ramón, Curso de derecho administrativo, t II, 14 edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 378

Dichas pretensiones relacionadas a la forma en la que se debe dar la liquidación de la indemnización o actualización de ella y de igual manera a los términos en los que en sentir de los actores se debe dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, lo mismo sólo tendría lugar en el escenario en que se decreten todas las solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* ello no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta coherente considerar procedentes estas solicitudes.

Pero además de ese análisis que resulta aplicable por las condiciones del caso, se debe tener en cuenta que materialmente resulta improcedente la solicitud, porque así lo ha considerado la jurisprudencia colombiana al tener que dirimir asuntos de este resorte. En tal sentido tenemos lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, quien en sentencia de 2021 ha dicho:

*“(…) Ello se explica porque, a voces de artículo 1080 del Código de Comercio «El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad».*

*Pero como el precepto 1077 al que esa norma remite exige la acreditación de «la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, si fuere del caso», la indeterminación de esa «cuantía de la pérdida» para la fecha de formulación de las citadas demandas, impedía predicar mora alguna frente a QBE Seguros S.A., pues no se presentaba – en aquel entonces – el retraso en la ejecución de una prestación debida de la que aquella (la mora) depende.*

*Teniendo en cuenta esas peculiaridades, y dado que, después de la integración del contradictorio, subsistía para la actora la incertidumbre de la pérdida y de sus alcances, **no resultaba viable reconocer réditos moratorios en una fecha anterior a la ejecutoria de la providencia, replicando así la solución que, de manera consciente, ha dado la jurisprudencia a eventos relacionados con prestaciones que no están plenamente determinadas antes de la intervención jurisdiccional.** Lo anterior en tanto que, como lo ha advertido insistentemente la Sala, “la falta de certeza excluye la posibilidad legal de que la deudora se encuentre en mora de pagar la obligación, requisito éste que desde antaño exige la jurisprudencia de esta Corporación”<sup>21</sup>. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En igual sentido ha dicho la misma corporación lo siguiente:

*“...Sin embargo, el guarismo antes alcanzado deberá ajustarse en un doble sentido. Primero, para excluir el porcentaje correspondiente al interés legal, por no haber sido objeto de pedimento y, aunque lo hubiera sido, porque su reconocimiento sólo procede en materia de obligaciones dinerarias, lo que únicamente se alcanzará con la sentencia de condena.*

***«La obligación de reparar, consistente en la satisfacción de una suma de dinero, sólo se hace exigible con la ejecutoria de la sentencia, de manera que es con posterioridad a ella que podrían computarse los créditos de mora, conforme al artículo 1617 del Código Civil»<sup>22</sup>**» (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

A igual conclusión llegó en sentencia reciente la Corte Suprema, cuando dice:

*"Es evidente, pues, que no es apropiado confundir la mora del deudor con el daño que produce quien priva a otra persona de la disposición de su dinero, por cualquier acción u omisión constitutiva de*

<sup>21</sup> Corte Suprema de Justicia SC-52172019

<sup>22</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, SC1256-2022, 27 de mayo del 2022

responsabilidad extracontractual.

*Quien infiere un daño injusto a otro tiene el deber de repararlo, pero solo incurrirá en mora cuando ese deber se concrete en una prestación cierta, de contornos definidos. Es decir, con un monto exacto de indemnización ya fijado y una fecha para su pago, **lo que suele ocurrir sólo cuando se profiere el fallo que declara la responsabilidad**, o cuando las partes, autónomamente, resuelven sus conflictos a través de cualquier medio autocompositivo".* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

De las anteriores providencias, el profesor Andrés Orión en un blog de su autoría concluye lo siguiente:

*"Así las cosas, podemos afirmar que se cuenta con precedentes jurisprudenciales sólidos, uniformes y reiterados que sustentan con rigor jurídico la tesis que, en materia de las pólizas de responsabilidad civil, es improcedente el reconocimiento y pago de los intereses de mora a partir del mes siguiente de la reclamación, en tanto, **el derecho se cristaliza, repetimos, en este producto, con el pronunciamiento en sede judicial en firme**, pues su reconocimiento sólo procede en materia de obligaciones dinerarias caso en el cual estamos frente a una obligación clara, precisa, determinada (...)"* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Del anterior trasegar jurídico tanto en jurisprudencia como en doctrina, queda claro entonces que es improcedente la solicitud del demandante de que se liquiden los intereses moratorios a luces del artículo 1080 del Código de Comercio desde la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o desde la notificación del auto admisorio de la demanda, pues dichos intereses no se causan de manera automática y objetiva, sino que, por el contrario, deben ser valorados caso por caso y además la jurisprudencia ha dicho que dicha obligación a cargo de la aseguradora sólo se cristaliza en su cuantía (art. 1077 ibidem) con el fallo en firme que declara la responsabilidad del asegurado.

## **CAPÍTULO V. CONTESTACIÓN FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**

### **I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**FRENTE AL HECHO PRIMERO:** No es un hecho que tenga vinculación con el llamamiento en garantía, es un simple relato de los datos del proceso que se adelanta ante este despacho y que nos ocupa, de cualquier manera, el mismo no es relevante respecto de las condiciones del contrato de seguro de que se debe ocupar este acápite.

**FRENTE AL HECHO SEGUNDO:** No es un hecho que tenga vinculación con el llamamiento en garantía, es un simple relato de las pretensiones y los hechos del proceso que se adelanta ante este despacho y que nos ocupa, de cualquier manera, el mismo no es relevante respecto de las condiciones del contrato de seguro de que se debe ocupar este acápite.

**FRENTE AL HECHO TERCERO:** Es cierto parcialmente que el ente territorial suscribió el contrato de seguro representado en la **Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507223000670**, con vigencia entre el 01 de marzo de 2023, hasta el 16 de noviembre de 2023, en coaseguro entre las compañías SBS (AIG) 20.00%, ASEGURADORA SOLIDARIA 22.00%, CHUBB SEGUROS COLOMBIA 28.00%, MAPFRE 30%, sin embargo, se debe expresar que no es cierto que se encuentren amparados todos los riesgos, pues ello dependerá del cumplimiento de las condiciones particulares y generales de la póliza de seguro.

**FRENTE AL HECHO CUARTO:** No es un hecho que tenga vinculación con el llamamiento en garantía, es una interpretación de los derechos que, en consideración del apoderado, le asisten a un asegurado en virtud de un contrato de seguro, de cualquier manera, el mismo no es relevante respecto de las condiciones

de la póliza de que se debe ocupar este acápite.

## **II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS TÁCITAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

Si llegara a surgir la necesidad de resolver lo concerniente a la relación sustancial que sirve de base a la convocatoria que hizo el Distrito Especial de Santiago de Cali respecto de mi representada, pese a la evidente ausencia de responsabilidad de la entidad que realizó el llamado en torno a los hechos de la demanda, solicito que, sin que esta observación constituya aceptación alguna de responsabilidad, sino que por el contrario oposición a cada una de las pretensiones del escrito genitor, se verifique por parte del despacho, las circunstancias particulares y generales que se pactaron en la póliza y que a continuación se exponen como medios exceptivos, ello como se dijo, en el remoto evento de que prosperen una o algunas de las pretensiones formuladas por el apoderado en su libelo demandatorio.

En consecuencia, en seguida me permito presentar el siguiente capítulo.

## **III. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

### **I. FALTA DE COBERTURA MATERIAL RESPECTO DE LOS RIESGOS EXPRESAMENTE ASEGURADOS EN LA PÓLIZA**

Al respecto debe el juzgador tener en cuenta que los hechos materia de debate no se encuentran amparados en la póliza según la cual se vinculó al proceso a mi procurada, ya que puede advertirse desde el objeto del contrato de seguro, que el mismo estaría relacionado con la actuaciones que le fueran imputables al tomador, y por supuesto siempre que las mismas estuviesen relacionadas con el giro ordinario de sus actividades, al respecto dice el acuerdo asegurativo:

#### **1. Objeto del Seguro**

Amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, los perjuicios patrimoniales y extra patri motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades.

Como en el caso en cuestión ya se ha explicado ampliamente por qué en el caso en cuestión se aplica la figura de la falta de legitimación en la causa por pasiva, es claro que no nos encontramos dentro de actividades que sean del giro normal de la entidad asegurada, pues las mismas, en este caso estarían vinculadas a las del Contrato No. 300-CO-4133-2023 que fue suscrito entre el Consorcio Gran Colector y Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., por lo que, en caso de tener que realizar un juicio de valor sobre las actividades que se relatan en el escrito introductorio, este sólo podrá hacerse a los sujetos parte el acuerdo referenciado, y no así a mi representada, por tal motivo la póliza por la que se le ha vinculado a esta última no está llamada a dar cobertura respecto de los hechos objeto de debate.

Por lo anterior, respetuosamente se declare probada esta excepción.

### **II. INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA AL NO REALIZARSE EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA**

Es preciso informar al despacho, que en el presente caso no existe obligación indemnizatoria a cargo de **Chubb Seguros Colombia S.A.** respecto de la **Póliza No. 1507223000670**, por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado amparado en el contrato de seguro.

En este sentido, el contrato de seguro solo entrará a operar sí y solo sí, el asegurado (Distrito de Santiago de Cali) es declarado patrimonialmente responsable por los presuntos daños que alega la parte

demandante, siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que impida los efectos jurídicos del contrato de seguro. Es así, como la declaratoria de responsabilidad civil constituirá el siniestro, esto es, la realización del riesgo asegurado (artículo 1072 del Código de Comercio).

En igual sentido se pactó el objeto de la póliza, veamos:

1. Objeto del Seguro

Amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades.

Al respecto, la parte demandante no ha demostrado los elementos constitutivos de la responsabilidad en cabeza del Distrito de Santiago de Cali, pues es claro que: i) No existe legitimación en la causa por pasiva del Distrito Especial de Santiago de Cali ii) no se ha acreditado que la causa eficiente del accidente haya sido la supuesta omisión en la señalización del maletín o la vía iii) como se ha explicado ampliamente a lo extenso de este escrito, hay una evidente conducta de la víctima quién conducía en desconocimiento de las normas de tránsito y desplazándose por un carril que no le correspondía y a una velocidad que seguramente no era la adecuada, lo que genera un ineludible rompimiento del nexo de causalidad necesario para declarar la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada.

Por lo anterior, en razón a que no se ha demostrado la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali en la causación del presunto daño y que, en todo caso, existe una causal de exoneración de la responsabilidad, solicito señor juez se declare probada esta excepción en cuanto no le asiste ninguna obligación a la compañía aseguradora toda vez que no se ha realizado el riesgo asegurado.

III. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Sin que implique el reconocimiento de la responsabilidad, es necesario que el Juez observe las condiciones particulares y generales de la **Póliza de Seguro No. 1507223000670**, dado que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, que establece que el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 del mismo Código, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Para el caso concreto, el límite del valor asegurado pactado en la póliza para los casos relacionados con predios labores y operaciones es de \$5.000.000.000 pesos m/cte.

COBERTURAS		VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil patronal	\$ 2.100.000.000,00	\$	3.500.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 500.000.000,00	\$	2.500.000.000,00	NO APLICA
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 2.000.000.000,00	\$	3.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 2.500.000.000,00	\$	2.500.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil productos	\$ 3.500.000.000,00	\$	3.500.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 5.000.000.000,00	\$	5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)

Dicho valor de \$5.000.000.000 pesos m/cte, se encuentra sujeto a la disponibilidad de la suma asegurada, dado que la ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que, es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de mi representada.

En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

Por lo anterior, señor juez solicito se declare probada esta excepción.

IV. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE MI PROCURADA NO PUEDE EXCEDER EL COASEGURO PACTADO EN LA PÓLIZA / INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD

Ahora, sin que lo siguiente implique la aceptación de la responsabilidad por parte de mi representada, es necesario precisar que, si llegaré a existir una condena en contra de la compañía aseguradora, el despacho debe tener en cuenta que los riesgos fueron distribuidos entre diferentes aseguradoras, así:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURADORA	TIPO DE COASEGURO	%PARTICIPACION
AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES	CEDIDO	20,00%
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	CEDIDO	22,00%
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO	28,00%
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO	CEDIDO	30,00%

En ese sentido, existiendo la distribución el riesgo entre las compañías de seguros, debe tenerse en cuenta que en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro, la responsabilidad de cada una de las aseguradoras está limitada al porcentaje antes señalado, pues no se puede predicar una solidaridad entre ellas.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio, el cual sostiene: *“en el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, **los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos**, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad”*.

Lo estipulado en la norma en cita, se aplica al coaseguro por estipulación expresa del artículo 1095 del Código de Comercio, que establece lo siguiente: *“las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, **en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”***.

Es así como las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe solidaridad legal ni contractual entre ellas. Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2021 con Radicación No. 08001-23-33-000- 2013-00227-01 (54460) estableció:

(...) 18.1.- En atención al coaseguro existente, se precisa que la llamada en garantía reembolsará únicamente el 55% de lo que llegue a pagar el Municipio de Santiago de Cali, pues, en estos eventos, **los distintos aseguradores deben responder con sujeción a la participación que asumieron al momento de la celebración del contrato sin que exista solidaridad** de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio: La jurisprudencia ha reconocido que en estos **casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente**. De hecho, ha indicado que en esos casos de coaseguro.<sup>23</sup> (Negritillas fuera del texto original)

En consecuencia, al momento de resolver lo concerniente a mi procurada y en el hipotético caso en que

<sup>23</sup> Sentencia del 9 de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Radicación No. 08001-23-33-000- 2013-00227-01 (54460).

se demuestre una obligación de indemnizar a su cargo, deberá tenerse en cuenta que la póliza de seguro antes referida fue tomada en coaseguro. En virtud de lo anterior, es claro que mí procurada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de estas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido.

Siendo así, resulta necesario aclarar que entre las coaseguradoras no existe solidaridad en la acreencia eventual por la pasiva, así lo ha entendido el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de enero del 2022, en la que afirmó:

*Es claro para la Sala que las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe en este caso solidaridad legal ni contractual entre ellas, de modo que la contratista violó el debido proceso a Segurexpo SA al negar la vinculación del coasegurador Colpatria SA al trámite administrativo e imponerle, sin fundamento jurídico admisible, la carga de responder por la obligación de un tercero que no fue citado al proceso y que, en tal virtud, carece de interés para cuestionar los actos administrativos objeto de control, con todo, como lo estimó el tribunal, ello solo otorga derecho a Segurexpo S.A. para reclamar la nulidad parcial del acto, precisamente porque las obligaciones no eran solidarias y bien podía reclamársele su parte sin la comparecencia del coasegurador.<sup>24</sup>*

Es claro que mi representada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de estas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido.

En virtud de lo anterior, solicito se tenga en cuenta el porcentaje del **veintiocho por ciento (28%)** asumido por **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**

**V. EXISTENCIA DE UN DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1507223000670**

Es preciso informar al despacho, sin que constituya reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de los asegurados, es pertinente recordar que, en el improbable caso que se decidiera afectar el contrato de seguro expedido por mi procurada, en el mismo se pactó un deducible, el cual se traduce en una porción del siniestro que en todo caso debe ser asumido por cuenta propia del asegurado, es decir, por el Distrito de Santiago de Cali.

COBERTURAS		VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00		5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil patronal	\$ 2.100.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00		5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00		NO APLICA
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 2.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00		5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00		5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00		5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil productos	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00		5% PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00		5 % PERD Min 2 (SMMLV)

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia frente al tema del deducible ha dicho:

*Dicho esto, en una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio que resulta legalmente viable, de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil.*

<sup>24</sup> Sentencia del 26 de enero de 2022. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 25000232600020110122201 (50.698).

*En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado "...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño".*

*Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.*

*Por tanto, el valor del ofrecimiento extendido por la compañía aseguradora podría variar en función de los perjuicios sufridos por el reclamante, así como los elementos probatorios que se hubieren allegado para acreditar el valor de la pérdida, conforme lo presupuestado en el artículo 1077 del código de comercio, aunado a las condiciones generales y particulares pactadas en la póliza, como lo son el límite del valor asegurado, el deducible pactado con el asegurado, entre otros factores.<sup>25</sup>*

De esta manera, en la **Póliza No. 1507223000670** se pactó un deducible para el amparo de la responsabilidad civil extracontractual, el cual equivale al **5% del valor de la pérdida o mínimo 2 SMLV**, por lo que, al momento de proferir una eventual sentencia condenatoria en contra del asegurado y optarse por afectar el contrato de seguro, deberá tenerse en cuenta el deducible pactado.

En virtud de lo anterior, solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

## **VI. LAS EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1507223000670**

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

*"Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro"<sup>26</sup>*

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la **Póliza de responsabilidad civil No. 1507223000670** cuya vigencia corrió desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 16 de noviembre 2023, en su página 1 y siguientes señala la obligación de las partes de atender una serie de exclusiones contempladas en el clausulado general depositado por la Aseguradora en la Superintendencia Financiera, entre las cuales se encuentra la numerada como "2.1.20: Responsabilidad civil derivada de automóviles o

<sup>25</sup> Concepto 2019098264 ago. 29/2019, Superintendencia Financiera de Colombia.

<sup>26</sup> Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020

vehículos automotores, autorizados o no para transitar por las vías públicas.” La cual solicito aplicar expresamente al caso concreto.

Por otro lado, si bien la Circular Básica Jurídica establece que las exclusiones deben constar en la primera página de la póliza y en caracteres destacados, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023 ha aclarado que lo necesario es que deban empezar en la primera página de la póliza, más no de su carátula, y en caracteres destacados para que tengan eficacia. Criterios que se cumplen dentro del proceso, pues las exclusiones se encuentran desde la primera página del condicionado en caracteres destacados de forma ininterrumpida. Lo anterior, en estricto cumplimiento del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

*Artículo 184. Régimen de pólizas y tarifas. (...) 2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva; b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y c. **Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza.** (Subrayado y negrillas por fuera del texto original)*

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil mediante la sentencia de unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023, señaló que:

*Ahora bien, con el propósito de aquilatar la hermenéutica de la norma en cuestión, debe recordarse que, conforme lo establece el artículo 1046 del Código de Comercio, se denomina póliza al documento que recoge el contrato de seguro. Esta póliza en sentido amplio contiene, como se ha visto, (i) la carátula, en la que se consignan las condiciones particulares del artículo 1047 ibídem y las advertencias de mora establecidas en los cánones 1068 y 1152 del mismo Código; (ii) el clausulado del contrato, que corresponde a las condiciones negociales generales o clausulado general; y (iii) los anexos, en los términos del artículo 1048 ejusdem. En ese sentido, se insiste en que el ordenamiento mercantil diferencia con claridad la carátula de la póliza de la póliza misma, y que, dada esa distinción, no cabe sostener que la regla del precepto 184 del ESOF debe cumplirse incluyendo los amparos básicos y las exclusiones, «en caracteres destacados» en la referida carátula. **Cuando la norma en cita alude a «la primera página de la póliza» debe entenderse que se refiere a lo que esa expresión significa textualmente, es decir, al folio inicial del clausulado general de cada seguro contratado, pues es a partir de allí donde debe quedar registrado, con la claridad, transparencia y visibilidad del caso,** uno de los insumos más relevantes para que el tomador se adhiera, de manera informada y reflexiva, a las condiciones negociales predispuestas por su contraparte: la delimitación del riesgo asegurado. (Subrayado y negrillas por fuera del texto original)*

Conforme a lo anterior, las exclusiones son eficaces siempre que consten en caracteres destacados y comiencen a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza, tal y como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia; exigencia que se cumple en el caso de marras, toda vez que las exclusiones fueron estipuladas a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza.

Sobre la ubicación de las exclusiones pactadas en el instrumento asegurativo, en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de la referida entidad, se reafirmó la postura realizando una regulación de la emisión de las pólizas y del contenido que estas debían tener, así:

*1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros: Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. **Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información:** 1.2.1.1. En la carátula: Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212, Cali, Valle del Cauca, Centro Empresarial Chipichape*

+57 315 577 6200 Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 de 201 | +57 317 379 5688 KLG M Página 40 | 46  
1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Co. 1.2.1.1.2. **En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión**, el contenido del inciso 1º del art. 1068 del C.Co. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal. 1.2.1.2. **A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones) Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza**. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral. (Subrayado y negrillas por fuera del texto original)

En ese sentido, la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia es completamente clara, pues indica que los amparos y exclusiones deben consignarse a partir de la primera página de la póliza, esto es, no de forma restrictiva en la carátula de la misma, puesto que, por razones prácticas, por imposibilidad física, y por las indicaciones legales referidas, no es viable que confluyan en esta misma página del contrato de seguro. De hecho, la misma Superintendencia a través de su Dirección Legal dio respuesta a consulta formulada por el Representante Legal de Liberty Seguros el pasado 04 de febrero de 2020 (Superintendencia Financiera de Colombia, Radicación No. 2019153273-007-000, trámite: Consultas específicas, remitente: 334000 – DIRECCIÓN LEGAL DE SEGUROS, firmado por Luz Elvira Moreno Dueñas, Director Legal de Seguros), conceptuando lo siguiente:

*Bajo esta línea de interpretación, debe entenderse que en aquellos casos en que en consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza, como lo precisa la instrucción de este Supervisor.*

Es preciso enfatizar que la Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Conforme a lo anterior, y a su clara condición de organismo estatal regulador de la actividad financiera y aseguradora, que por tanto ejerce la supervisión de manera idónea, es que el Decreto 2739 de 1991, en su artículo 3.3, estableció como una de sus funciones, la siguiente:

*Emitir las órdenes necesarias para que las entidades sujetas a la inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.*

De acuerdo entonces a la función pública que realiza esta entidad es claro que sus conceptos y las circulares que expide tienen un fin orientador, claramente de carácter vinculante, no siendo coherente que expida una circular que vaya en desmedro de los intereses de los asegurados, tomadores o beneficiarios en el contrato de seguro.

En conclusión, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse la exclusión arriba señalada o alguna de las exclusiones de las que constan en las condiciones generales y particulares de la **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil responsabilidad civil No. 1507223000670** cuya vigencia corrió desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 16 de noviembre 2023, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia.

En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino

libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado. Solicito señor juez declarar probada esta excepción.

## VII. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohilada.

En los anteriores términos solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

## VIII. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Un principio que rige el contrato de seguro de daños es el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. Siendo así, la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado.

Por lo anterior, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el beneficiario con el pago de la indemnización. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia No. 5065 del 22 de julio de 1999 estableció:

*Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.<sup>27</sup>*

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente: **“respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”.** (Negrillas fuera del texto original)

Así las cosas, no debe perderse de vista que las pretensiones de la parte actora no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo un pago por parte del ente territorial que no tiene origen en una obligación legal o contractual.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una

<sup>27</sup> Sentencia No. 5065. (22 de julio de 1999). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. M.P. Nicolás Bechara Simancas.

responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciéndola.

En los anteriores términos, solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

#### **IX. PAGO POR REEMBOLSO**

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, se solicita al honorable operador judicial que, en el improbable caso de encontrar responsable al asegurado y de llegarse a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena. Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, sino por reembolso o reintegro.

#### **X. AUSENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado, con sujeción a las condiciones de cada póliza; en virtud de ello, es válido afirmar desde ya que, de conformidad con la exposición previa, no le asiste a mi representada en todo caso la obligación de hacer efectivas la póliza de responsabilidad civil extracontractual vinculada en esta contienda, toda vez que el acaecimiento del riesgo asegurado y otorgado en la misma, no se ha demostrado y se tiene que esta no se afectaría como resultado de la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad indemnizatoria taxativamente determinada en la caratula de las misma.

En tal sentido, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

#### **XI. GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se encuentre originada en la ley o en el contrato de seguro expedido por mi procurada, incluida la de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 282 del Código General del Proceso que establece “(...) *Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes (...)*”.

En este sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción deberá declararse de manera oficiosa por el despacho en la sentencia que defina el mérito.

### **CAPÍTULO V. OPOSICIÓN PROBATORIA**

#### **1. INTERVENCIÓN EN LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS**

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen

a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas en la demanda y en la contestación a la demanda.

## **2. FRENTE A LA SOLICITUD DE OFICIAR A LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE CALI Y A LA FISCALÍA 60 LOCAL DE CALI**

Me opongo a la solicitud probatoria número 6.2. del acápite de pruebas, en razón a que a la parte demandante le asistía el deber de obtener ese documento a través del ejercicio del derecho de petición, de conformidad con el artículo 78, numeral 10 del Código General del Proceso, que expresa: *“son deberes de las partes y de sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que mediante el ejercicio del derecho de petición se pueden obtener”*.

Así mismo, en armonía con el artículo 173 del Código General del Proceso, referente a las oportunidades probatorias expresa que *“el juez se abstendrá de decretar las pruebas que directamente o que por medio de derecho de petición hubiere podido conseguir la parte quien la solicite, salvo que la petición no haya sido atendida, lo cual, deberá acreditarse sumariamente”*. En este caso, el actor dice:

*Solicito al señor Juez que oficie a la autoridad competente, para que allegue copia autentica de los siguientes documentos:*

*1-. A la Fiscalía 60 Local de Cali o a la autoridad donde se encuentra en curso el proceso con radicado Rad. 760016099165202284608 para que expida copia de todo el expediente del proceso penal, en especial: 1) Informe policial de accidentes de tránsito, 2) Formato FPJ 1 que es el reporte de inicio, 3) Formato FPJ 3 que es el informe ejecutivo, 4) Formato FPJ 9 inspección de lugares, 5) Todos los dictámenes de medicina legal, 6) Todas las actas de declaraciones, entrevistas, interrogatorio o testimonio que se hayan practicado en el proceso, 7) Álbum fotográfico elaborado por los agentes de tránsito, 8) Plano digital topográfico FPJ 17. SCANNER FARO FOCUS, 9) Tarjeta de propiedad de los vehículos Y 10) Videos del accidente de tránsito.*

Sin embargo, es claro del examen del expediente que la parte demandante no acreditó que hubiere solicitado los documentos mediante derecho de petición, ni que dicha hipotética solicitud, no haya sido atendida.

## **3. FRENTE AL INTERROGATORIO DEL DISTRITO Y LA OTRA DEMANDADA.**

Me opongo al interrogatorio del Distrito de Santiago de Cali y de Empresas Municipales de Cali E.L.C.E. E.S.P., sustentado en el artículo 195 que establece *“no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas”*. Por lo anterior señor juez, solicito se rechace esta prueba por inconducente.

## **4. FRENTE A LOS INTERROGATORIO DE PARTE DE FABIAN ESTEBAN YEPES, OFELIA CASTILLO MUÑOZ Y KAREN VANESSA YEPES CASTIÑO**

Me opongo a esta solicitud probatoria en el entendido de que se solicita la comparecencia de los referidos sin hacerse una precisión sobre el motivo de su participación en el proceso, véase que en la solicitud se dice *“a efecto de que respondan las preguntas que le formularé para que aclaren, precisen o informen sobre los hechos y en general sobre todo lo que sea relevante para el proceso”* sin embargo, vemos que ello implicaría que se solicitan los interrogatorios a fines de demostrar las manifestaciones de la demanda.

En ese contexto es necesario reiterar al despacho que la declaración de la parte *per se* no prueba los hechos, y que el artículo 198 del Código General del Proceso es claro en indicar que el juez podrá solicitar la comparecencia de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos, sin embargo, la norma no faculta a las partes a solicitar su propia declaración.

Así lo ha corroborado el Consejo de Estado en decisión del 04 de abril de 2022, respecto del caso con radicación 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820) en el que resolvió un recurso de reposición sobre un auto que negó una declaración de parte solicitada por los demandados. En tal providencia el órgano de cierre manifestó que:

*A diferencia de lo previsto en el artículo 203 CPC, que prescribe que cualquiera de las partes puede pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso, el artículo 198 CGP prevé la posibilidad de que el juez, de oficio o a solicitud de parte, pueda ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre estos hechos. **Esta norma no faculta a las partes a solicitar su propia declaración.** El precepto hace referencia a que el juez cite a las partes, bien sea porque de oficio considera necesaria su declaración o porque la parte contraria lo solicita. Son dos puntos de partida distintos. Mientras el artículo 203 CPC dispone que las partes pueden solicitar la citación de la parte contraria, el artículo 198 CGP prevé que el juez puede ordenar la citación de las partes. Esta norma no se refiere a la parte contraria, pues regula el interrogatorio de las partes ordenado por el juez -de oficio o a solicitud de estas- que, como árbitro de la contienda, no tiene una contraparte en el proceso. Además, es preciso insistir en que quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que produzca el efecto pretendido, pues la sola afirmación de una parte no es suficiente para acreditarlo. De ahí que, permitir que la misma parte solicite su declaración, no tiene en cuenta lo previsto en el artículo 167 CGP, ni corresponde a una interpretación armónica de esta norma (artículo 30 CC).*

*Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma, **es claro que la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así, la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no sería necesaria la práctica de pruebas.** Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En tal sentido es claro que no es procedente la solicitud del interrogatorio de parte realizada por el actor, en tanto resultaría una prueba inútil, pues dicha declaración por sí sola no tiene la entidad de demostrar los hechos de la demanda, y si la solicitud se hace para referirse a tales hechos, ello resulta superfluo, pues se entiende que lo expresado en la demanda procede de la declaración del demandante. Motivos por los cuales, resulta improcedente la solicitud.

## 5. FRENTE A LA SOLICITUD DE ALLEGAR DICTÁMENES PERICIALES

Me opongo a que se permita allegar a la parte actora dictámenes periciales por fuera de la etapa procesal que dispone la ley para ello, con fundamento en lo contenido en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues si bien dicha norma contempla la posibilidad de anunciar la pericia y aportarla en el término que el juez confiera, lo cierto es que ese supuesto de hecho no se cumple para el caso en concreto, pues como bien se indica en el escrito genitor, la parte actora no aportó los dictámenes periciales “por falta de recursos económicos” más no por insuficiencia del término como lo exige la norma. Sobre lo que pretenden hacer los demandantes de anunciar los dictámenes periciales de reconstrucción del accidente y de pérdida de capacidad laboral, el profesor Hernán Fabio López Blanco dice lo siguiente:

*“... norma que estimo no tiene aplicación respecto de quien lo va a aportar con la demanda, debido a que parte la disposición del supuesto de insuficiencia del término previsto, lo que no se predica para la demanda, de ahí que asevero, que, salvo un caso de excepción, siempre con la demanda inicial debe ser aportado dictamen.”<sup>28</sup>*

Y frente a la excepción que menciona en esa cita el profesor López Blanco dice en el pie de página No. 7 de la pág. 376 lo siguiente:

<sup>28</sup> (López Blanco, H. F. (2019). Código General del Proceso. Pruebas. DUPRE Editores Ltda. Págs. 375 y 376)

*"Sería la hipótesis de que esté a punto de estructurarse un plazo de prescripción y la única forma que subsista de interrumpirlo, pues ya se agotó el del requerimiento directo de que trata el art. 94 inciso final del CGP, sea el de presentar la demanda."*

Entonces, aquí es claro que el artículo 227 del Código General del Proceso **NO** contempló la posibilidad de anunciar un dictamen pericial cuando la parte no tuviera dinero para su contratación y/o realización, para luego aportarlo, lo que se contempló fue dicha posibilidad (de aportarlo con posterioridad) en casos donde el término fuese insuficiente para la contratación y realización de la pericia, circunstancia que no sucede en el caso de autos, pues los demandantes todavía tenían un término holgado de caducidad y podían desplegar otras gestiones para la consecución del dictamen.

En resumen, la facultad de anunciar un peritaje sólo está consagrada para el supuesto de hecho en que el término previsto sea insuficiente, lo que no sucede aquí y por ello debe denegarse la posibilidad de arrimarlo al proceso con posterioridad a la etapa definida para ello.

## **6. FRENTE A LA INVERSIÓN DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA**

La parte demandante solicita que se invierta la carga de la prueba considerando que las demandadas se encuentran en una posición más favorable para demostrar lo hechos del litigio. Al respecto, me opongo rotundamente en cuanto al Distrito de Santiago de Cali, las otras demandadas y la compañía aseguradora, pues no se cumplen los requisitos para invertir la carga de la prueba, toda vez que: i) los demandados no tienen mejor cercanía al material probatorio, ii) no tienen en su poder el objeto de la prueba, iii) no intervinieron directamente en los hechos, iv) la contraparte no se encuentra en un estado de indefensión o incapacidad y v) este caso debe ser analizado bajo un régimen subjetivo de responsabilidad.

Para el caso concreto ocurre todo lo contrario, pues la parte demandante es la única que, por su cercanía con los hechos, puede probar los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual, ya que fue la única que los presenció y los sufrió. Así mismo, la parte actora solicita la declaratoria de la falla del servicio, la cual, pertenece por excelencia al régimen de tipo subjetivo de responsabilidad y, por ende, le corresponde a la parte interesada probar el hecho generador, el nexo causal y el daño.

En este sentido, no le asiste al demandante razón jurídica alguna para que el despacho acceda a la inversión de la carga de la prueba, máxime cuando en este tipo de casos de accidentes de tránsito por supuestas deficiencias en la señalización de la vía u obstáculo vial, se ha consolidado jurisprudencialmente la postura de que le corresponde al interesado probar que dicha deficiencia, en este caso que la presunta falta de señalización del maletín vial, fue la causa eficiente del hecho alegado, para que así exista la posibilidad de declarar la responsabilidad.

Por lo anterior, la solicitud de la parte actora atiende más a la imposibilidad por su parte de acreditar los elementos de la responsabilidad extracontractual, que porque se esté en algunas de las causales del artículo 167 del Código General del Proceso.

## **CAPÍTULO VI. PRUEBAS**

### **DOCUMENTALES**

1. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507223000670.
2. Clausulado general RCE 2012.
3. Certificado de cesión de reaseguro anexo A, expedido por **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**

## INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas respectiva a los señores Fabian Esteban Yepes, Ofelia Castillo Muñoz y Karen Vanessa Yepes Castillo con la intención de que den respuesta a un cuestionario que le formularé verbalmente en la diligencia, con relación a las situaciones de hecho que motivaron la presente demanda, así como sobre los presuntos daños padecidos.

## TESTIMONIAL

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas al señor:

- Hubert Castañeda Gil identificado con placa No.305 y cédula de ciudadanía No. 16.795.379, quien fue el policía o agente de tránsito encargado de suscribir el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. 0001629237 respecto de los hechos que en este caso se debaten, y que se encuentra adscrito a la Policía Nacional o a la secretaria de Tránsito de Cali, y se pude notificar a través de la dirección Cra. 3 #56 - 30, Comuna 5, Cali, Valle del Cauca y/o al teléfono (602) 4184215

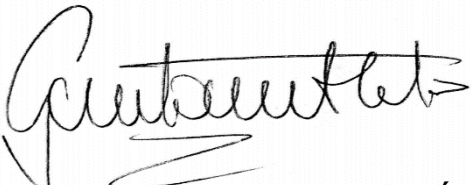
## CAPÍTULO V. ANEXOS

1. Escritura Pública con poder general de representación a mí conferido
2. Certificado de existencia y representación legal de mi representada expedido por la Cámara de Comercio de Cali.
3. Certificado de existencia expedido por la Superintendencia Financiera.
4. Documento de identidad y tarjeta profesional del suscrito apoderado.

## CAPÍTULO VI. NOTIFICACIONES

Mi poderdante y el suscrito recibiremos notificaciones en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212, de la ciudad de Cali, o en la dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No.19.395.114 de Bogotá D.C.

T. P. No. 39.116 del C.S. J.